

PBI Colombia

Informe Anual, junio de 2018



**INFORME
ANUAL
2017**





4	¿Quienes somos?
5	¿Donde Trabajamos?
12	2017: el primer año de implementación del Acuerdo de Paz
17	Ejes de trabajo
18	Acompañamiento de protección
26	Interlocución e incidencia
34	Publicación y distribución
38	Apoyo a la reconstrucción del tejido social
42	PBI Colombia a través de 4 historias
44	"El Pueblo no se rinde Carajo!"
48	Desplazamiento y resistencia en el Bajo Atrato
52	Talleres de acompañamiento psicosocial en la Finca Europa, Sucre
53	Misión Internacional de verificación de la situación de derechos humanos
57	Informe de Recursos humanos y financiero
64	Financiadores de PBI Colombia

¿Quienes somos?

Pease Brigades International es una organización internacional no gubernamental, aconfesional e independiente, reconocida por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, que desempeña labores de observación y acompañamiento internacional en el país desde 1994.

Nuestra misión es proteger el espacio de acción de las personas defensoras de derechos humanos, que sufren agresiones por su trabajo en pro de la defensa y promoción de los derechos humanos y de la justicia social.

PBI trabaja únicamente a petición de las organizaciones locales, y no pretende suplantar sus iniciativas, sino apoyarlas mediante un modelo de protección integral, que incluye:

- Acompañamiento físico y observación internacional en terreno.

- Incidencia política dentro y fuera de Colombia.

- Difusión de información y sensibilización sobre la situación de derechos humanos.

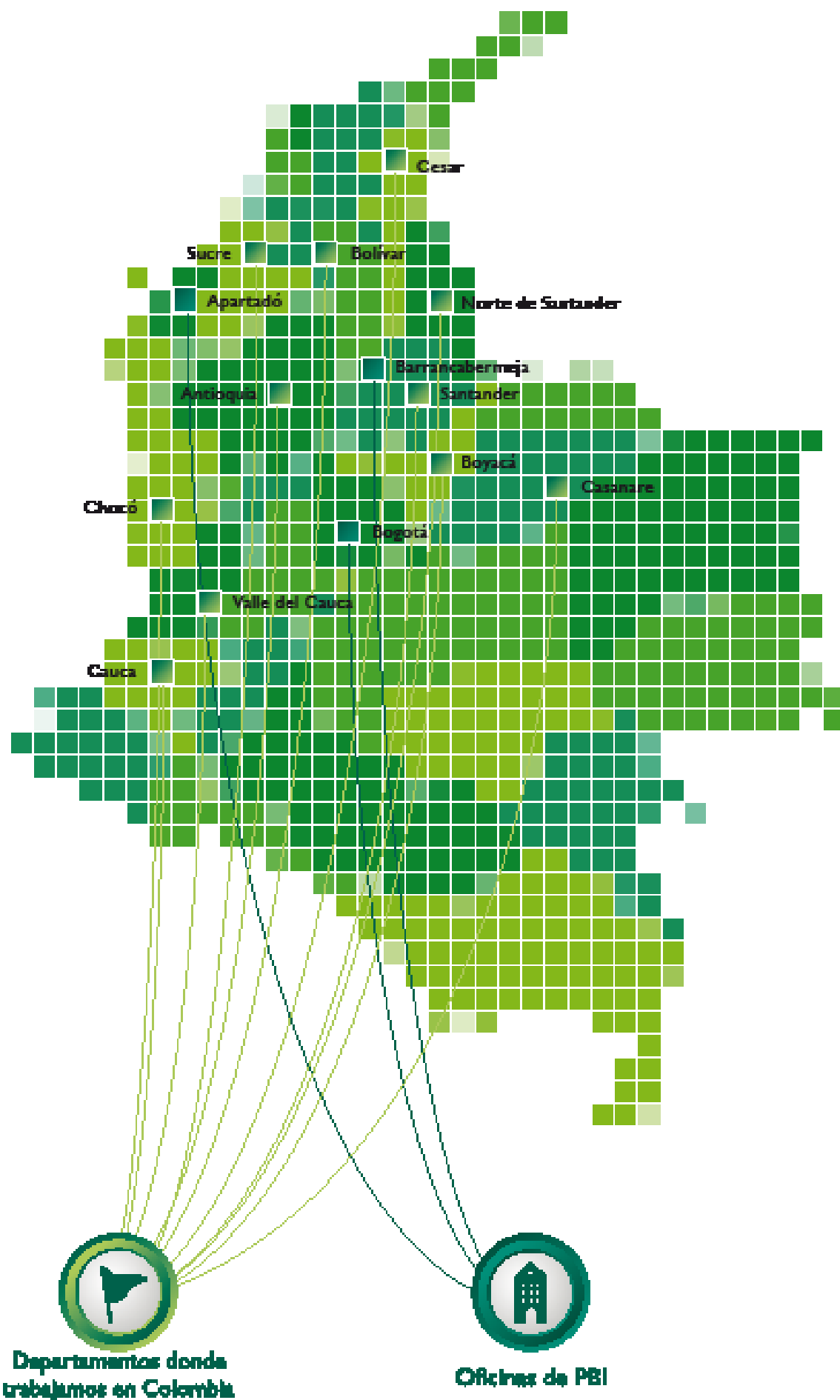
- Facilitación de talleres para el fortalecimiento y la reconstrucción del tejido social colombiano.

PBI Colombia trabaja desde un mandato de prevención y protección con un enfoque diferencial e interseccional, prestando especial atención a la situación de los colectivos vulnerables, entre ellos las mujeres defensoras y las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas que resisten de manera noviolenta en sus territorios. Para ello, PBI analiza de manera diferenciada los riesgos que afrontan estos colectivos para poder desarrollar mecanismos de protección específicos y adecuados a sus necesidades.

Ejes de trabajo



¿Dónde trabajamos?



Durante 2017 PBI Colombia acompañó a un total de 20 organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos. De estas 20 organizaciones dos eran nuevas: Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (ORIVAC) y DiPaz, la cual está realizando labores de observación en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz en dos regiones del país (Urabá y Norte del Cauca). A su vez, se acompañó a 2 comunidades rurales y 3 personas defensoras de derechos humanos individuales en territorios afectados por el conflicto colombiano. Esto se traduce en 125 personas, de las cuales 53 son mujeres.

Es importante destacar que nuestro acompañamiento tiene, además, un alcance más amplio, que abarca la protección indirecta de cerca de 230.000 personas ya que las organizaciones, personas y comunidades acompañadas por PBI desarrollan actividades que benefician a otros colectivos, de manera que se convierte en un acompañamiento paraguas para estas personas. Asimismo, realizamos varias actividades de observación internacional incluyendo misiones de verificación de la implementación de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno colombiano y las ex-guerrillas de las FARC, así como de verificación de la situación de derechos humanos en diferentes regiones del país.



Desde los Equipos de Terreno se realizaron 222 **acompañamientos** durante 527 días completos, 46% de los cuales fueron a mujeres, y se mantuvieron 277 reuniones y rondas de visibilización con personas y organizaciones acompañadas.

El área de **Apoyo a la Reconstrucción del Tejido Social** de PBI Colombia realizó 29 talleres con la participación de 456 personas, siendo mujeres un 51%.



A través de nuestro trabajo de **acompañamiento político**, sostuvimos **324 reuniones** con la comunidad internacional en Colombia y en el exterior, y con autoridades civiles y militares colombianas, con el **objetivo de trasladarles nuestra preocupación por las violaciones de DDHH en Colombia y dar a conocer el trabajo de las personas, organizaciones y comunidades que acompañamos:**

- 116 reuniones con Organizaciones Internacionales de la sociedad civil en Colombia, Europa y EEUU, incluyendo plataformas y redes de incidencia.
- 59 encuentros con Cuerpo Diplomático y organismos multilaterales en Colombia.
- 83 interlocuciones con autoridades civiles y militares colombianas.
- 70 reuniones con instituciones gubernamentales y multilaterales en Europa y EEUU.

Además, en 2017 organizamos y acompañamos 5 giras de personas defensoras de DDHH, tres de ellas en Europa, una en Canadá y una en Bogotá dirigida al Cuerpo Diplomático. Al mismo tiempo, PBI ha facilitado y participado en 4 misiones internacionales de verificación de la situación de Derechos Humanos en Colombia.

En cuanto a nuestro trabajo de **visibilización**, recopilamos historias de terreno y análisis de la situación de derechos humanos en nuestra página web, pbicolombia.org, la cual recibió más de **110.000 visitas**, lo que representa un aumento de 40.000 en un año. La plataforma **Smugmug**, que alberga nuestras fotohistorias y fotografías sumó **187.000** visitas y los videos en nuestro canal **Youtube** registraron **200.000 visiones**.

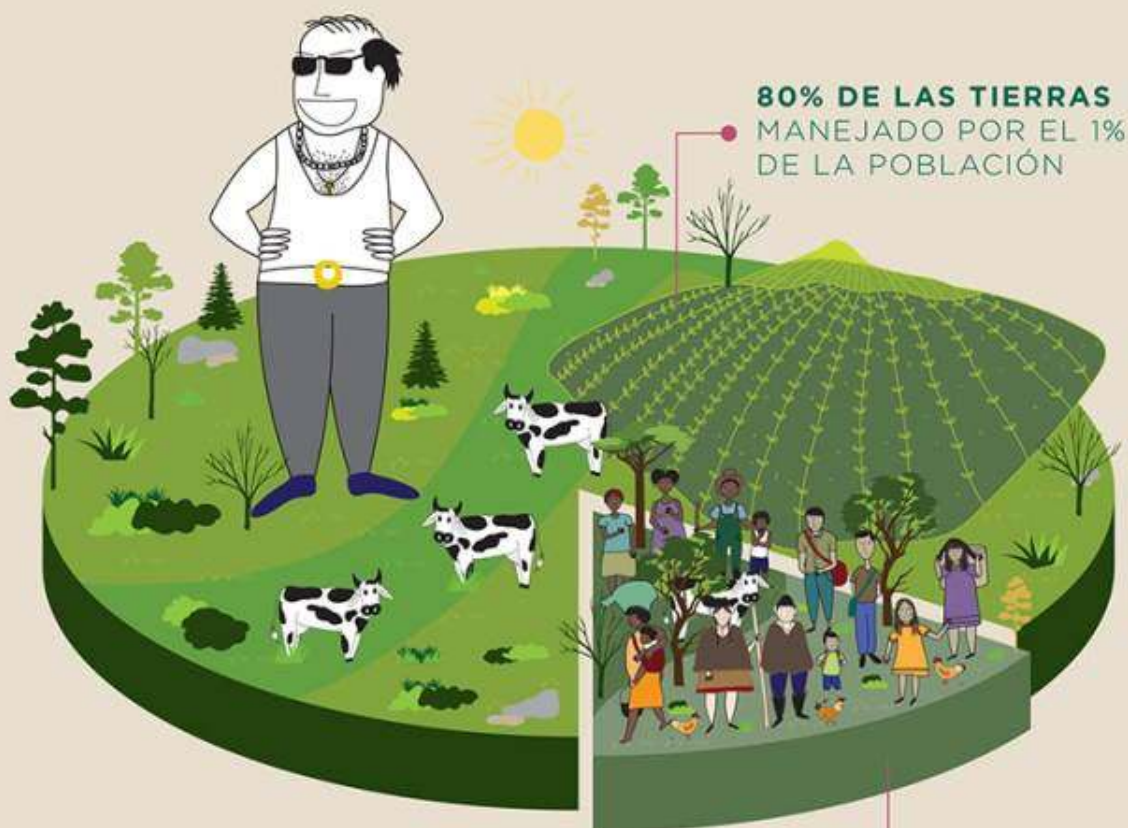


2017: el primer año de la implementación del Acuerdo de Paz

A pesar de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en noviembre de 2016 y los esfuerzos del Estado y otras instancias para ubicar a Colombia en un contexto de “post-conflicto”, la principal conclusión es que la situación de riesgo para las personas defensoras de derechos humanos, sus organizaciones y comunidades, se ha mantenido o incluso ha empeorado tras la firma del Acuerdo. Los inicios de la implementación del acuerdo de paz han estado acompañados de una ofensiva contra líderes y lideresas sociales, campesinos y campesinas, personas defensoras de derechos humanos en todo el país: según el Consejo Noruego para los Refugiados, en 2017 el número de eventos de desplazamiento forzado se incrementó un 36% respecto a 2016, los ataques contra las comunidades aumentaron un 17% durante la primera mitad de 2017¹ y, según la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), se han reportado más de 100 muertes violentas de líderes y miembros de organizaciones sociales². El homicidio de mujeres defensoras pasó de tres casos registrados (2016) a siete (2017).

Es preocupante que varios análisis coincidan en que el vacío dejado por las FARC-EP, fortalecido por la ausencia integral del Estado, ha dejado nuevas zonas en disputa para el resurgimiento y expansión de todo tipo de criminalidad y grupos armados al margen de la ley³. La propia Defensoría del Pueblo en su Informe 010-17 del 30 de marzo de 2017 también subraya varios escenarios de riesgo en este contexto, que no sólo afectan a personas defensoras de derechos humanos, sino a la población civil en general: las disidencias de las FARC-EP, la expansión del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el aumento del accionar militar contra este grupo, igual que la expansión y el fortalecimiento del grupo neoparamilitar denominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)⁴. La Defensoría del Pueblo reconoce que hay “una pretensión de los grupos armados ilegales por copar los espacios del territorio de los que se han retirado las Farc”⁵. Según el análisis de OACNUDH, el 45% de los homicidios que se produjeron en 2016 y el 67% en el 2017, ocurrieron en zonas de donde salieron las FARC. A su vez, la Defensoría del Pueblo destaca varios aspectos de la sistematicidad de las agresiones contra personas defensoras y líderes sociales: 69% de las víctimas desarrollaban una labor de organización comunitaria, el 25% eran líderes indígenas, y hubo un alto nivel de afectación de líderes de las Juntas de Acción Comunal y líderes adscritos a Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos⁶.





20% DE LAS TIERRAS
MANEJADO POR EL 99%

AMÉRICA LATINA

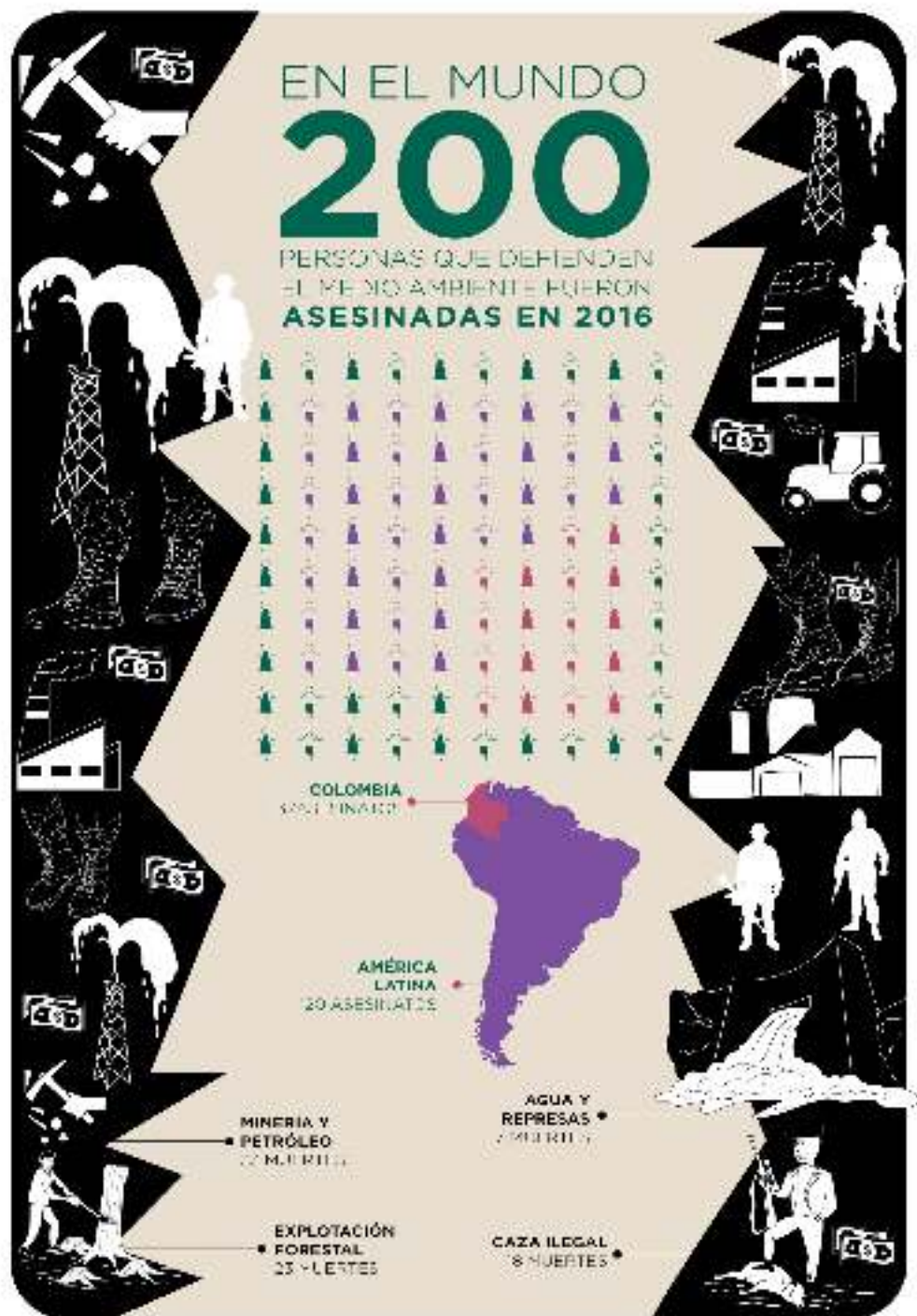
REGIÓN CON LA MAYOR
DESIGUALDAD EN LA
DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA



Aun cuando existen avances en la implementación del Acuerdo de Paz y la reglamentación legislativa de medidas de protección contempladas en el mismo⁷, preocupa la falta de implementación real y concertación con las comunidades étnicas y campesinas en los territorios, que viven una grave crisis de seguridad en sus tierras y denuncian cada día más presencia de grupos armados ilegales, amenazas y persecuciones. Otra de las dinámicas que se acentuó tras el Acuerdo de Paz, fue el aumento de violaciones de DDHH por intereses económicos y las afectaciones medioambientales que ponen en peligro los medios de vida de comunidades ancestrales. Esta temática se ha convertido en el foco de trabajo de muchas organizaciones acompañadas, que gracias al acompañamiento de PBI pueden seguir trabajando para proteger los recursos naturales y a las comunidades locales que viven de los mismos.

Paralelamente, desde principios de 2018, la mesa de diálogos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Gobierno colombiano permanece en crisis debido al cambio del equipo negociador, la no reanudación del cese al fuego bilateral que las partes habían pactado durante tres meses, que culminó el 9 de enero, y la consecuente escalada terrorista de esta guerrilla contra la población civil, oleoductos y la fuerza pública⁸. Más de 50 plataformas de paz y derechos humanos, iniciativas de la sociedad civil y personalidades han realizado un llamado a las delegaciones del Gobierno y del Ejército de Liberación Nacional para que reinicien las negociaciones y acuerden una nueva tregua para avanzar en la agenda acordada⁹.





Notas de Pie

1 El Espectador: [“La implementación de la paz no ha llegado”: director del Consejo Noruego de Refugiados](#), 22 de noviembre de 2017

2 De acuerdo con nuestro trabajo en terreno, la Oficina ha verificado durante este año y hasta 20 de diciembre de 2017, en el caso de defensores de derechos humanos y líderes un total de 105 homicidios, incluidos: 73 asesinatos contra líderes y lideresas, 18 asesinatos de miembros de movimientos sociales y políticos, y 14 víctimas durante movilizaciones sociales. Además la Oficina tiene otros 11 casos más en proceso de verificación. OACNUDH: [Comunicado de Prensa](#), 20 de diciembre de 2017.

3 El Espectador: [La amenaza del narcoparamilitarismo](#), 13 de febrero de 2017.

4 Defensoría del Pueblo: Informe de riesgo no. 010-17 A.I., 30 de marzo de 2017, disponible aquí: Verdad Abierta: [Defensoría del Pueblo emite informe de riesgo sobre líderes sociales](#), 31 de marzo 2017

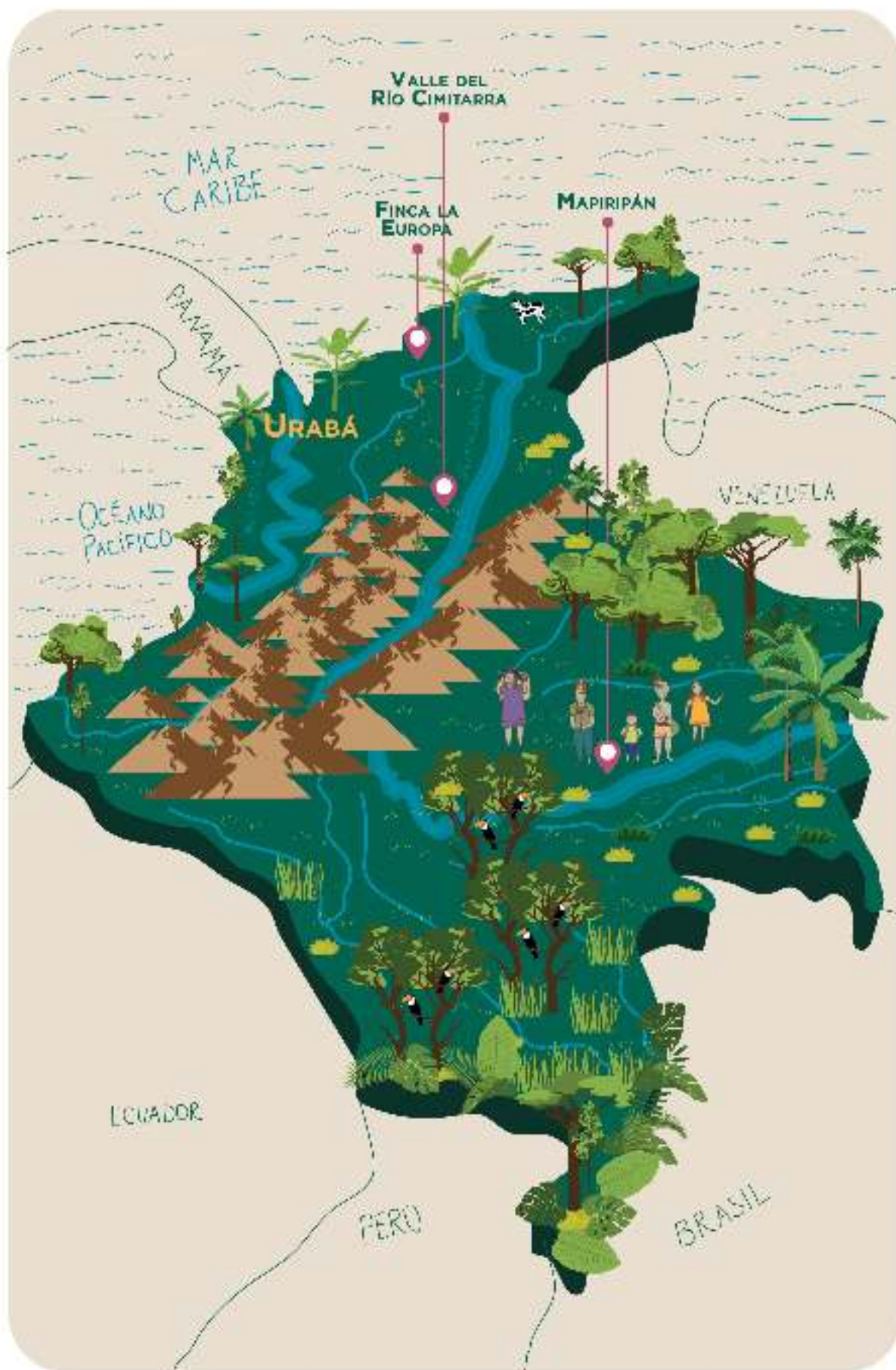
5 Defensoría del Pueblo: [156 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en los últimos 14 meses: Defensoría](#), 31 de marzo de 2017

6 Defensoría del Pueblo: Informe de riesgo no. 010-17 A.I., 30 de marzo de 2017

7 Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, Sistema de Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo, etc.

8 El Espectador: [Santos suspende inicio del quinto ciclo de conversaciones con el ELN](#), 29 de enero de 2018

9 El Espectador: [Organizaciones sociales, en “proceso de paz permanente”](#), 1 de febrero de 2018



Ejes de Trabajo

El mayor reto que ha enfrentado PBI Colombia, y en general el movimiento de defensa de DDHH en 2017 en Colombia, ha sido la violencia generada por los altos índices de impunidad en el país¹, las nuevas dinámicas de los grupos armados tras la desmovilización de las FARCEP y los vacíos en la implementación del Acuerdo de Paz entre las FARC y el Gobierno de Colombia en materia de protección y seguridad en los territorios.² Por otro lado, las negociaciones entre el ELN y el gobierno colombiano iniciadas en febrero de 2017, no se han traducido en una consolidación de la paz en los territorios debido a las disputas por el control territorial entre grupos sucesores al paramilitarismo, otros actores ilegales y la Fuerza Pública. Esto ha requerido una dedicación extraordinaria en el análisis de una coyuntura muy inestable. Gracias a PBI Colombia, organizaciones acompañadas han podido seguir realizando sus labores en los diferentes territorios de conflicto y violencia política y seguir documentando estas violaciones de DDHH.

Nuestro trabajo de protección ha contribuido a que ninguna de las organizaciones, personas y comunidades directamente acompañadas por PBI en Colombia haya tenido que abandonar su trabajo de defensa de los derechos humanos debido a su situación de riesgo a pesar del empeoramiento de la coyuntura y de haber enfrentado graves incidentes de seguridad. Por el contrario, PBI ha contribuido a que varias organizaciones acompañadas lograran aumentar y expandir sus actividades, especialmente en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz de La Habana. Es el caso de organizaciones como la ACVC, CREDHOS o CAHUCOPANA que han ampliado su espacio de trabajo relativo al punto 1 del Acuerdo (reforma rural integral), punto 2 (garantías para la participación política) y punto 4 (sustitución de cultivos ilícitos). Organizaciones como CCAJAR y FNEB han aumentado su trabajo en el marco del punto 5 (Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición). Además, Franklin Castañeda, acompañado de la FCSPP, fue elegido representante de la sociedad civil en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (punto 3.4.)³, ente dedicado a la construcción de una política pública que asegure garantías para la defensa de los derechos humanos y el desmantelamiento de las estructuras sucesoras del paramilitarismo responsables de homicidios y masacres en contra personas defensoras, movimientos sociales y movimientos políticos.

Notas de Pie

1Contagio Radio: [En Colombia hay una impunidad del 97% en violaciones de DDHH](#), 23 de octubre del 2017

2El 31 de marzo 2017, la Defensoría del Pueblo emitió un Informe de riesgo frente a las situaciones de alto riesgos vividos por muchas organizaciones sociales y de defensa de derechos humanos al nivel nacional, lo cual resultó en una Alerta Temprana en Febrero de 2018, ver entre otros, Verdad Abierta: [Defensoría del Pueblo emite informe de riesgo sobre líderes sociales](#), 31 de marzo 2017; El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también expone esta situación en su informe anual del 2017: [Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia](#), 2 de marzo 2018

3Hacemos Memoria: [Erradicar el paramilitarismo, una labor de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad](#), 12 de julio 2017





Acompañamiento de protección

*Brindado a organizaciones y
comunidades que promueven los
derechos humanos en Colombia*

Apesar del riesgo que eso conlleva, comunidades y organizaciones locales siguen denunciando el actuar de grupos armados ilegales.¹ Este es el caso, por ejemplo, de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, quien además de evidenciar la presencia de neoparamilitares en la región a través de comunicados públicos, dio el 17 de mayo testimonio sobre la presencia de estos grupos en una Audiencia Pública en la Comisión Segunda del Congreso Nacional de la República, tras la convocatoria a un debate de control político frente a los ataques a defensores de derechos humanos.²

Con el acompañamiento de PBI, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz que acompaña y asesora a reclamantes de tierra y a procesos de retorno de desplazados en varias regiones del país, ha podido realizar múltiples misiones de verificación para documentar violaciones de DDHH, como incursiones de grupos neoparamilitares en zonas humanitarias. Los/as habitantes de estas zonas nos manifiestan reiteradamente la importancia del acompañamiento internacional para permanecer en sus territorios y seguir reclamando los derechos sobre su tierra y territorio.



Debido al aumento de conflictos sociales generado por megaproyectos, esta temática se ha convertido en el foco de trabajo de muchas organizaciones acompañadas, que gracias al acompañamiento de PBI pueden seguir trabajando para proteger los recursos naturales y a las comunidades que viven de los mismos. Destacamos el pronunciamiento de la Corte Constitucional a finales del año 2017, en el caso de la mina de carbón El Cerrejón³ en La Guajira, por la cual ordenó “proteger el agua, la salud y la seguridad alimentaria de comunidades que dependen del arroyo Bruno”, reconociendo al mismo tiempo que “en el desarrollo de esa actividad minera existen ‘Incertidumbres sobre los impactos ambientales y sociales del proyecto de modificación parcial del cauce del Arroyo Bruno’”. Así mismo, ordenó que se realice una investigación técnica más profunda del impacto ambiental de la minería donde se tendrá que tomar en cuenta unos puntos precisos sobre ese impacto ambiental. Esto representa un avance importante en el reconocimiento de las reflexiones y denuncias de las comunidades afectadas por esa minería en La Guajira⁴, gracias al proceso jurídico liderado por el CCAJAR y acompañado por varias organizaciones internacionales, entre las cuales se encuentra PBI.

En el marco de garantías para la protesta social, destacamos nuestro acompañamiento a la Asociación Nomadesc durante el Paro Cívico de Buenaventura, donde sus integrantes asumieron un importante liderazgo en la veeduría social de las movilizaciones y negociaciones con el Gobierno colombiano.⁵

Desde PBI celebramos la liberación del defensor de DDHH **David Ravelo**⁶ el 20 de junio de 2017, acompañado histórico de PBI, tras 7 años encarcelado a raíz de un proceso marcado por irregularidades y falta de cumplimiento con los estándares internacionales al debido proceso, así como se ha manifestado por varias organizaciones nacionales e internacionales. Su caso fue aceptado por la Jurisdicción Especial para la Paz. En el transcurso de los 7 años de su encarcelación, PBI Colombia estuvo acompañándole física y políticamente, así como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y, en específico, su abogado Reinaldo Villalba, quien realizó un trabajo destacado en ese proceso penal. Se agradece y reconoce el acompañamiento internacional así como el apoyo realizado por varias instituciones y organizaciones internacionales en este caso emblemático de judicialización de un defensor de derechos humanos, como fue la visita de la Delegación de la Unión Europea a la cárcel de Barrancabermeja en junio de 2017.⁷





"El acompañamiento de PBI ha sido fundamental para los defensores de derechos humanos en Colombia particularmente para el suscrito David Ravelo Crespo como defensor de derechos humanos en Barrancabermeja y la región del Magdalena Medio, que ha posibilitado antes del acompañamiento blindar nuestro trabajo en toda la región del Magdalena Medio, poder asistir a muchos espacios y poder garantizar nuestra vida.

Durante el encarcelamiento ha sido un acompañamiento permanente que ha hecho posible también que las autoridades penitenciarias y el tiempo en la cárcel que ha sido cerca de 7 años, y que permanentemente los amigos y amigas de PBI estuvieron ahí y digamos cada semana, cada quince días acompañándome posibilitó ganarme respeto, ganarme blindaje para que se garantizará mi vida durante la permanencia en la cárcel. Esta solidaridad me ayudó seguir luchando por mi libertad y por la verdad en mi caso.

Y luego ya en libertad ha sido posible este acompañamiento con las nuevas amenazas que surgen para visibilizar esta problemática

Pero además durante el tiempo que estuve en la cárcel, ese acompañamiento fue valioso porque mi problemática judicial, este montaje criminal que me hicieron fue posible dar a conocer al nivel nacional e internacional y que en Europa, Estados Unidos y el mundo se podía conocer la persecución a la cual somos objetos los defensores de los derechos humanos y en el caso particular de David Ravelo.

Mi familia y mis amigos, las organizaciones de derechos humanos en Colombia valoramos y además estamos planteando que el acompañamiento de PBI a defensores y defensoras de los derechos humanos en Colombia se pueda mantener para que se pueda visibilizar sobre todo en este momento de crisis por las amenazas que estamos siendo objetos y el exterminio que estamos sometidos los defensores.

Es muy importante que PBI continúe en Colombia."

David Ravelo



Por otro lado, destacamos el acompañamiento iniciado en 2017 a la **Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (ORIVAC)** que representa el 70% de las comunidades indígenas del departamento, ubicadas en la cuenca del río San Juan, una de las zonas más afectadas actualmente por el conflicto. Estas comunidades son víctimas de la lucha que mantienen diversos grupos armados por el control territorial. Gracias a PBI, organizaciones como ORIVAC han podido documentar estas violaciones de DDHH en las zonas más alejadas y amenazadas del país.



En el transcurso del año 2017, PBI Colombia acompañó de manera periódica a **Claudia Julieta Duque** en diversas audiencias y reuniones con autoridades. Asimismo, destacamos la declaración del caso de la periodista y acompañada Claudia Julieta Duque como delito de lesa humanidad por los actos de tortura psicológica a los que fue sometida por parte de órganos del Estado.⁸



Por último, destacamos nuestro acompañamiento a **Daniel Prado⁹**, a través de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, abogado apoderado de las víctimas del presunto grupo paramilitar Los 12 Apóstoles el cual actuaba en el Norte de Antioquia, en el marco del juicio contra el hermano del expresidente Álvaro Uribe, Santiago Uribe, acusado de ser uno de los presuntos impulsores de dicho grupo paramilitar en la década de los noventa.¹⁰

Notas de Pie

1 Como por ejemplo la Cijp quien publica de manera seguida informes y constancias desde los territorios donde acompañan a comunidades, <https://www.justiciapazcolombia.com> ; La comunidad de Paz de San José de Apartadó publica de manera seguida los ataques que sufren, <http://www.cdpsanjose.org>

2 Pacifista!: [Tenemos el video completo del supuesto campamento paramilitar en Apartadó](#), 18 de mayo 2017

3 La explotación minera a cielo abierto más grande de Latinoamérica

4 Ccajar: [Corte Constitucional ordena proteger el agua, la salud y la seguridad alimentaria de comunidades que dependen del arroyo Bruno](#), 21 de diciembre 2017 ; Corte Constitucional, [Comunicado n°58](#), 28-29 noviembre 2017

5 Este acompañamiento se encuentra desarrollado en nuestra parte de historias más completas; Cijp: [Hechos violentos en el marco del paro cívico de Buenaventura deben parar](#), 31 de mayo 2017

6 Front Line Defenders: [Liberación de David Ravelo Crespo](#) ; Vanguardia.com: [El líder social David Ravelo Crespo recobró su libertad](#), 21 de junio del 2017

7 Para ver toda la información respecto a este caso, PBI Colombia: [David Ravelo](#)

8 El Universal: [Caso de Claudia Julieta Duque fue declarado como crimen de lesa humanidad](#), 25 de octubre de 2017

9 Contagio Radio: [Amenazan de muerte a abogado defensor de víctimas de los 12 Apóstoles](#), 3 de noviembre 2017

10 Contagio Radio: [Santiago Uribe irá a juicio por creación de paramilitares de los 12 Apóstoles](#), 18 de Agosto 2016





Interlocución e incidencia

Sensibilización sobre el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos ante las autoridades estatales colombianas y la comunidad internacional

El acompañamiento político es un eje central del trabajo de PBI Colombia y sus actividades se desarrollan en diferentes aspectos con el fin de visibilizar la situación de riesgos y amenazas que padecen las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos. Una parte del trabajo de acompañamiento político se dedica a tener reuniones bilaterales y comunicación fluida con las autoridades civiles y militares en Colombia y la otra con la visibilización de las violaciones de derechos humanos y situaciones de riesgos vividas en los territorios donde PBI Colombia realiza su labor de acompañamiento y observación internacional.

La comunicación y la relación con autoridades civiles y militares se desarrollan a nivel local, regional y nacional. Un impacto importante que se tuvo en el año 2017, fue la respuesta estatal después de haber lanzado una Alerta de Acción en febrero debido al incremento de la presencia y control del grupo neo-paramilitar de las AGC, en la región de Urabá poniendo en grave riesgo la población civil. La Consejería Presidencial para los DDHH convocó a PBI a una reunión en Apartadó junto con ACNUR, la Fiscalía, el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional para conocer el análisis de PBI en relación al riesgo de las personas defensoras y comunidades en la zona (en particular sobre la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP) y las Zonas Humanitarias en las cuencas de Curbaradó, Jiguamiandó y Cacarica).

En cuanto a la visibilización de la situación de derechos humanos en Colombia, a nivel nacional, se mantienen reuniones bilaterales de manera seguida, así como una comunicación fluida con el cuerpo diplomático en Colombia, sobre todo con las embajadas de los y las brigadistas¹, la Delegación de la Unión Europea y la oficina de la representación del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, quienes, de igual manera da un aval al trabajo de PBI en Colombia. Del mismo modo, se organizan reuniones con los y las donantes. En estas reuniones se intercambian análisis de coyuntura, preocupaciones frente a situaciones de riesgos enfrentados por las y los defensores de derechos humanos y estrategias de protección. En el marco de la visibilización que PBI Colombia quiere dar a la situación de violación de derechos humanos en Colombia y amenazas que reciben las personas defensoras de derechos humanos que acompañan, se organizan también reuniones con medios de prensa, universidades extranjeras, representantes de organizaciones internacionales y ONGs que trabajan temas de Derechos Humanos en Colombia.





Estas reuniones se enmarcan en el objetivo de buscar el fortalecimiento de redes de apoyo de las organizaciones y personas acompañadas. Por ejemplo, en mayo de 2017 se organizó una reunión con las representantes del equipo Colombia de Amnesty International con el objetivo de establecer canales de comunicación fluidos y de colaboración en la visibilización de dichas situaciones de riesgos que enfrentan las comunidades que viven en medio del conflicto armado. Esta Organización Internacional publicó varias Acciones Urgentes en el transcurso del año 2017 en relación con procesos y organizaciones acompañadas por PBI Colombia.²

Con ese mismo objetivo de ampliar la visibilidad de los y las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en Colombia, se realizaron dos giras de incidencia de personas acompañadas en la ciudad de Bogotá³, con el objetivo de que pudieran exponer las situaciones vividas en los territorios y dinámicas de reconfiguración del conflicto armado con la permanencia y expansión del control territorial de nuevos grupos armados, y grupos neoparamilitares – posdesmovilización⁴. Una de ellas fue la de Gildardo Tuberquia, líder de la Comunidad de Paz quien en el mes de agosto vino a Bogotá a realizar una serie de reuniones con el Cuerpo Diplomático y OACHNUD con el fin de explicar la difícil situación en la cual se encuentra la Comunidad de Paz frente a la expansión del control territorial de las AGC.

El 6 de octubre 2017, PBI Colombia organizó un desayuno de trabajo sobre la problemática de la tierra, en el marco de la implementación del punto 1 del Acuerdo de Paz y la restitución de territorios a comunidades campesinas. Se invitaron a tres representantes de procesos colectivos con sus acompañantes a nivel nacional (Argemiro Lara de la Finca Europa con Erika Gómez – CPDH, German Graciano de la Comunidad de Paz con Germán Romero – DH Colombia y Marco Velázquez CAVIDA con el Padre Alberto – Cijp) y más de diez embajadas participaron a este espacio de diálogo e intercambio de información.⁵ El conocimiento de estos casos y la cercanía de las organizaciones con el Cuerpo Diplomático facilitó la organización de dos eventos más grandes en diciembre (7 y 14) con la participación de más de 50 personas de ONU, embajadas y agencias internacionales en el marco de la activación de PBI después de los asesinatos de Mario Castaño y Hernán Bedoya en el Bajo Atrato.⁶ De manera excepcional se publicó un pronunciamiento público para llamar la atención sobre el incremento de los riesgos vividos para las personas defensoras de derechos humanos y para solicitar a la comunidad internacional que se reforzara la atención hacia la protección de

personas defensoras⁷, lo cual ha sido ampliamente difundido a través de las redes sociales y la Red de Apoyo de PBI Colombia (la publicación en el blog fue vista 451 veces en la versión inglesa y 702 en la versión en español).⁸

Con el fin de fortalecer y concretar la visibilización de las situaciones vividas en los diferentes territorios, se realizaron varias visitas a terreno de representantes del Cuerpo Diplomático donde se reunieron con los líderes y las lideresas sociales, y organizaciones de derechos humanos quienes pudieron compartir testimonios de situaciones preocupantes. Con este mismo propósito, PBI Colombia acompañó y coordinó diferentes misiones internacionales de verificación sobre la situación de derechos humanos en los territorios.

En noviembre del 2017 se realizó una misión internacional de verificación, coordinada por Mundubat junto a PBI y la Oficina Internacional de Derechos Humanos – Acción Colombia (OIDHACO) la cual visitó Bogotá, Tumaco, Buenaventura, Quibdó, comunidades en Urabá y también los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación La Elvira y La Variante.⁹ El Informe final de esta misión fue presentado en diferentes países y lanzado públicamente en el Parlamento Europeo el día 6 de diciembre de 2017. Tras esta presentación las y los Eurodiputados enviaron una carta al Presidente de Colombia pidiendo, entre otras cosas, mayor protección y garantías para personas defensoras. Asimismo, tanto la Misión como las actividades a su alrededor han permitido mayor fortalecimiento de la relación de PBI con otras redes y OING (véase Mundubat, ICIP, Liga Internacional de Mujeres para la Paz y Libertad, etc).

PBI impulsó el envío de por lo menos de 4 cartas desde el Cuerpo Diplomático al Alto Gobierno entre julio y diciembre de 2017 debido al riesgo de seguridad para la Comunidad de Paz, los líderes del Bajo Atrato y las organizaciones internacionales de acompañamiento. Ese trabajo de acompañamiento político ha permitido que se visibilizara situaciones complejas vividas en los territorios en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz, las faltas de cumplimiento de dicho Acuerdo en algunas circunstancias, la presencia y el control ejercido por nuevos actores armados ilegales y la expansión de grupos post-desmovilización amenazando la seguridad de las comunidades.





Al nivel internacional, PBI Colombia ha mantenido un trabajo continuo de comunicación y reunión con nuestra Red de Apoyo, los Grupos Nacionales de PBI Colombia, organizaciones internacionales de derechos humanos y parlamentarios europeos, representantes de las Misiones Permanentes de los Estados frente a la UE y Ministerios de Asuntos Exteriores, pero también con el Congreso de los EEUU y diferentes instituciones estadounidenses y organizaciones internacionales para América Latina en Washington DC, entre otros.

En ese marco, PBI contribuye al amplio y fortalecimiento de la red de apoyo de las organizaciones y comunidades acompañadas a través, entre otros, de la organización de giras de personas defensoras. A nivel internacional, se han organizado tres giras en varios países de Europa: Berenice Celeita, directora de NOMADESC en conjunto con Marcos Ramirez de Guatemala; Olga Silva de la organización Humanidad Vigente y Franklin Castañeda, representante de la sociedad civil en la Comisión Nacional de Garantías de Protección y miembro de la organización acompañada Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Estas giras se tradujeron en 3 preguntas europarlamentarias y contribuyeron a que en enero de 2018 se diese en la plenaria del Parlamento Europeo un debate sobre el Apoyo al Proceso de Paz en Colombia con una declaración de la Alta Representante de la UE. Como resultado de la incidencia en la UE, además, se ha contribuido a la realización de numerosas preguntas parlamentarias en el Euro-parlamento sobre Colombia: de las 19 que se presentaron, la mayoría están directamente relacionadas con la labor de PBI y las prioridades estratégicas trabajadas este año (Construcción de Paz, Defensores/as de derechos humanos, Violaciones de derechos humanos por intereses económicos) y muchas de ellas han sido presentadas por miembros de la red de apoyo de PBI y/o directamente vinculadas a casos de personas y organizaciones acompañadas por PBI.



Notas de Pie

1Por ejemplo, PBI Colombia: [Brigadista Austriaca se reúne con consejero de la Embajada de Austria](#), 1 de julio 2017

2Amnesty International: [Colombia: Repunte de ataques contra comunidad de paz demuestra que el conflicto sigue vivo](#), 21 de marzo 2017 ; Amnesty International: [COLOMBIA: ASESINATOS DE LÍDERES RECLAMANTES DE TIERRA](#), 11 de diciembre 2017 (entre otros, ver página: <https://www.amnesty.org/es/countries/americas/colombia>)

3PBI Colombia: [Amenazas de Neo-paramilitares a la Comunidad de Paz continúan](#), 8 de agosto 2017 ; PBI Colombia: [Defensores se marchan satisfechos tras un maratón de reuniones sobre neoparamilitarismo](#), 4 de agosto 2017

4Como son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)

5PBI Colombia: [PBI reúne a representantes del Cuerpo Diplomático y Líderes de Tierra](#), 6 de octubre 2017

6Será desarrollando más a bajo

7PBI Colombia: [PBI llama la atención sobre el incremento de riesgo para personas defensoras de Derechos Humanos](#), 13 d diciembre 2017

8342la recibieron a través de la difusión a la Red de Apoyo en español y 288 en la versión en Inglés

9PBI Colombia: [Contexto de la misión internacionales de verificación](#), 3 de noviembre 2017

PBI Colombia, en su labor de incidencia con las Naciones Unidas, ha presentado (de forma conjunta con los demás proyectos de PBI y con organizaciones internacionales) dos declaraciones orales durante la 34ª sesión del Consejo de Derechos humanos de las Naciones Unidas con ocasión de la presentación del informe anual de la Oficina de Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Oacnudh), contribuyendo a visibilizar la grave situación de riesgo de las personas defensoras de derechos humanos.







Publicación y distribución

*Visibilizar las graves y continuas
amenazas y atentados que han sufrido
las personas defensoras de derechos
humanos en Colombia*



La publicación [Tierra, cultura y conflicto](#) es el hito más destacado a nivel de comunicaciones de PBI Colombia en 2017. Producto de un esfuerzo colectivo, el boletín de 168 páginas, impreso en dos idiomas, muestra de manera muy gráfica el territorio como centro del conflicto social colombiano.

Igualmente, se realizaron otras dos publicaciones destinadas a dar a conocer la problemática del acceso a tierra en Colombia: el boletín temático centrado en el asentamiento de Cacarica, ubicado en el Bajo Atrato [“Cacarica: nuevamente en medio del conflicto y la violencia y Señoras de Cacarica”](#); y un informe en colaboración con ODHACO sobre el [“Grave aumento de asesinatos de quienes defienden los derechos humanos en Colombia”](#).



Además, en 2017 se elaboraron 88 entradas en nuestro [blog público](#), 3 publicaciones de distribución restringida para nuestra red de apoyo y 3 Alertas de Acción ante el aumento de las amenazas contra defensores/as de DDHH. Adicionalmente, y como respuesta frente a los asesinatos de líderes reclamantes de tierras del Bajo Atrato, PBI Colombia elaboró un [Pronunciamiento Público](#) visibilizando la grave crisis humanitaria y de desprotección que viven hoy las comunidades en los territorios. A lo largo del año, la página web de PBI Colombia ha tenido **79.726 visitas** en su versión en español y **31.942** en su versión en inglés.







Apoyo a la reconstrucción del tejido social

El fortalecimiento de medidas de seguridad, prácticas de salud mental y estrategias de incidencia se realiza a través del eje del Apoyo a la Reconstrucción del Tejido Social (Arts) de PBI. A través de esta área se facilita el intercambio de saberes en temas de protección, seguridad digital y del ámbito psicosocial por medio de talleres colectivos. En 2017, PBI ha llegado a 456 personas gracias a la facilitación de 29 talleres que tuvieron lugar principalmente en aquellas regiones que cuentan con un menor apoyo por parte de instituciones del Estado y agencias no gubernamentales, como son el Suroccidente del país, la región del Magdalena Medio y del Urabá.

En el año 2017, este trabajo se enfocó en brindar talleres a grupos con participantes de distintas organizaciones y colectivos para fortalecer, no sólo las estrategias de seguridad y de afrontamiento de las organizaciones, sino para contribuir también al fortalecimiento del trabajo en redes. En este sentido, cabe destacar nuestra participación en la iniciativa impulsada por CCAJAR, MOVICE y CPDH - “Escuelas de la Memoria” - que reúne a colectivos de víctimas donde se busca generar una articulación de los diferentes procesos para la construcción de la memoria, de cara a las Comisiones de la Verdad en el post-acuerdo.

Este enfoque de fortalecimiento de redes, no se limita al ámbito nacional, sino que PBI fomenta la creación de estas sinergias a nivel regional. Un ejemplo en 2017 fue nuestra intermediación para facilitar la participación de organizaciones colombianas en el [Encuentro Regional de Defensoras y Defensores de la Tierra, Territorio y Medioambiente en México](#).

Además, PBI organizó dos encuentros de mujeres defensoras. En uno de ellos, defensoras de distintas organizaciones tuvieron la oportunidad de intercambiar prácticas de protección y auto-cuidado desde un enfoque diferencial. En un segundo encuentro, participaron organizaciones que trabajan por los derechos de este colectivo y donde se involucran temas relacionados a la trata de personas con fines sexuales y al derecho a decidir sobre su cuerpo. A su vez, PBI acompañó el primer Encuentro de Mujeres de la Zona de Reserva Campesina de la región del Magdalena Medio.





Por otro lado, este año hemos incrementado nuestros esfuerzos para reforzar las capacidades digitales para el manejo seguro y responsable de la información por parte de organizaciones defensoras de DDHH. En este sentido, destacamos el taller de seguridad digital para los/as finalistas del premio nacional de DDHH que otorga DIAKONIA; finalistas que se encuentran amenazados/as por la labor que desempeñan. El objetivo fue el de exponer herramientas de seguridad digital que pudieran compartir con sus organizaciones.

El éxito de los talleres de PBI se materializa, no sólo en las peticiones de continuidad de estos procesos, sino también en la réplica que las mismas organizaciones están realizando con colectivos que acompañan. Un ejemplo de ello son los resultados del trabajo realizado con la Pastoral Social de Buenaventura, quienes están aplicando protocolos y medidas de seguridad con las y los jóvenes que acompañan en contextos de riesgo. Otro ejemplo de esta multiplicación, es el alcance logrado a través de la comunidad La Europa, en Sucre, quienes han servido de puente para que PBI inicie talleres con comunidades aledañas pues, consideran que fortalecer a comunidades vecinas en temas de protección y acompañamiento psicosocial, impulsa el trabajo en red entre las comunidades.





PBI Colombia a través de cuatro historias

"¡El Pueblo no se rinde Carajo!"

Acompañamiento a Nomadesc en el marco del Paro Cívico en la ciudad portuaria de Buenaventura. Esta frase fue el lema de la población quien se movilizó para reivindicar derechos básicos

Buenaventura (ciudad del pacífico colombiano) como segundo puerto más importante del continente latinoamericano es un punto estratégico de importación y exportación internacional, donde circula alrededor del 50% del comercio exterior de Colombia; son varios los proyectos en curso para convertirla en una ciudad portuaria dedicada a atraer la inversión extranjera que hasta la fecha ha alcanzado los 600 millones de dólares.²

En los “barrios de Bajamar” - situados a orillas del mar - el gobierno municipal ha propuesto construir un malecón y un macro complejo turístico, ampliar la Terminal de Contenedores de Buenaventura y construir un Centro de Actividades Económicas. Estos proyectos van contra el modo ancestral de vida de los moradores locales ya que la implementación de los megaproyectos implica la reubicación de sus comunidades. La falta de una adecuada compensación en términos políticos, económicos y sociales supondría un riesgo para la subsistencia de estas comunidades. La situación es mucho más grave si además tenemos en cuenta que Buenaventura es una ciudad afectada por una pobreza endémica, donde gran parte de su población llegó desplazada de otras zonas a causa del conflicto armado, y donde la corrupción ha reinado por muchos años suponiendo un gran lastre para los bonaverenses.³

Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), en el 2016 fueron desplazadas 11.363 personas distribuidas en 3.068 núcleos familiares, mientras que durante el primer trimestre de 2017 habían sido desplazadas 913 familias con un total de 3.549 personas; y entre las zonas más críticas identificadas figura la zona rural de Buenaventura.⁴

Por otro lado, no se puede olvidar que la vinculación con el conflicto ha sido tenaz al llegar distintos actores armados ilegales disputándose el territorio atraídos por el control de varias rutas que desde las cordilleras del Norte del Cauca conectan Colombia directamente a México⁵. De manera que los grandes intereses que derivan de su ubicación geoestratégica han generado una de las tragedias humanitarias más graves que hay en el país hoy en día, con comunidades desplazadas, amenazadas y en estado de confinamiento.

A raíz de esta situación de desprotección, el 16 de mayo de 2017 los habitantes de Buenaventura decidieron movilizarse levantando un paro y saliendo a las calles para exigir al Gobierno el cumplimiento de acuerdos anteriores y la garantía de derechos fundamentales, sobretodo en temas como la salud, educación, empleo y seguridad. En este sentido, es de especial consideración, por ejemplo, la falta de un sistema hídrico para el agua potable o la inexistencia de un hospital de segundo o tercer nivel para medio millón de personas, con tasas de pobreza que sobrepasan el 80%⁶.



Después de veintidós días de paro, durante los cuales se declaró el estado de emergencia social, el 6 de junio, los líderes de Buenaventura y el Gobierno llegaron a un acuerdo para la aprobación de aproximadamente 1.5 billones de pesos distribuidos entre viviendas, salud, empleo y productividad, agua y saneamiento, educación, energía y justicia⁷. El Gobierno se comprometió además a dar un 100% de cobertura de agua potable y saneamiento básico a la población residente en una zona.

Sin embargo, meses después del fin del paro, a pesar de los avances en las mesas temáticas que se instalaron durante los días de la huelga, se detectaron inconformidades que llevaron a los colectivos ciudadanos a movilizarse de nuevo. Además, sigue siendo preocupante la falta de garantías de seguridad para aquellas personas que tuvieron y tienen un rol de liderazgo dentro del Comité del paro cívico de Buenaventura como pudo evidenciarse con el asesinato de Temístocles Machado, figura emblemática del movimiento social bonaerense, líder y miembro ejecutivo del paro cívico⁸.

La contribución del acompañamiento de PBI al Paro Cívico de Buenaventura:

Durante los primeros días, la movilización logró desarrollarse dentro de un contexto pacífico y no-violento, sin embargo, después empezaron a sucederse los primeros incidentes de seguridad⁹. Según la Defensoría del Pueblo, durante los veintidós días que duró la movilización se recibieron 519 denuncias relacionadas con la vulneración de derechos humanos y abuso desproporcionado de la fuerza por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) ocurridas en el marco del ejercicio del derecho a la protesta pacífica.

Con este contexto, PBI recibió una petición por parte de la Asociación para la Investigación y la Acción Social - Nomadesc, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (Cijp) y la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (Fcspp), para acompañarlas en el desarrollo del trabajo que realizan con la comunidad bonaerense movilizada para el ejercicio legítimo de su derecho a la protesta social durante el paro cívico de Buenaventura.

Por ello, PBI mantuvo una presencia física permanente y rotativa durante los días que duró el paro y desarrolló un papel de interlocución permanente con la Fuerza Pública tanto en terreno, como a través de un seguimiento constante a la situación gracias a la abertura de un canal de comunicación con las Autoridades Nacionales (Consejería Presidencial, Ministerio del Interior), el cuerpo diplomático y la participación en una rueda de prensa con el Cinep. Además, en el marco de un trabajo de articulación con otras organizaciones de acompañamiento activas en terreno (Fellowship of Reconciliation, Project for International Accompaniment and Solidarity, Red de Hermandades, Witness for Peace), PBI llevó a cabo una serie de reuniones con el objetivo de armar una estrategia de incidencia conjunta e informó a sus grupos nacionales y red de apoyo en Europa de la situación en Buenaventura.

Al mismo tiempo, PBI estuvo presente en calidad de observador internacional, a petición de las organizaciones sociales, en la “mesa de derechos humanos, garantías y protección” que fue instalada el 4 de junio, independiente de las ocho mesas temáticas que se habían establecido por la negociación, cuyo objetivo era crear un mecanismo de protección ante las violaciones de DDHH que se estaban dando en el contexto del paro cívico, especialmente los abusos por parte de la fuerza pública. Esta mesa tenía a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) como garante y facilitador. Los participantes de esta mesa fueron el Ministerio del Interior, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Fiscalía, la Personería, Acnur, el Servicio Jesuita al Refugiado, Medicina legal, Bienestar Familiar y los/las representantes del Comité del Paro Cívico. La Cijp y Nomadesc participaron activamente como miembros del Comité del Paro Cívico. El resultado de esta mesa fue la creación de un mecanismo para la protección y prevención de las violaciones de DDHH, a través de cuatro rutas de acción:

- ruta para el acceso a la justicia
- ruta de protección para líderes sociales
- ruta de atención en salud
- ruta específica para atención y protección de niños, niñas y jóvenes.



El 13 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) publicó un comunicado para expresar sus preocupaciones por posibles casos de represalias y estigmatización en contra de los y las personas lideresas del paro y defensoras de derechos humanos, respaldando las peticiones de las organizaciones sociales que acompañaron el Paro cívico.

Además del acompañamiento físico y político brindado a estas organizaciones con motivo de su trabajo en el paro cívico de Buenaventura, PBI en el marco del acompañamiento integral que proporciona (físico, incidencia, visibilización y psicosocial/autoprotección), ha llevado a cabo algunas acciones desde el área de reconstrucción del tejido social y protección con algunas de las organizaciones sociales a las que acompañó durante este paro.

PBI postuló al defensor de derechos humanos Enrique Chimonja Coy de la Cijp al Premio Diakonia, quien resultó ganador en la categoría “Defensor del año” por el trabajo desarrollado en Buenaventura. En el marco de este premio, el defensor realizó una gira de incidencia a Estados Unidos durante el mes de febrero 2018 para visibilizar la situación en Buenaventura y para dar seguimiento a la efectiva implementación de los compromisos que se estipularon en ocasión del paro cívico.



Notas de pie

1 Esta frase fue el lema del Paro cívico en la ciudad de Buenaventura en mayo-junio 2017

2 Semana: [La metástasis de Buenaventura](#), 27 de mayo 2017

3 Centro Nacional de Memoria Histórica: [Buenaventura: un puerto sin comunidad](#), 2015 , Semana: [El círculo vicioso de la corrupción en Buenaventura](#), 23 de abril de 2018

4 El Tiempo: [Van más de 3.500 desplazados en el Pacífico en lo corrido del año](#), 8 de marzo 2017

5 El Espectador: [El Pacífico colombiano y el cartel de Sinaloa](#), 10 de febrero 2018

6 El Colombiano: [Declarar emergencia, el pedido de Buenaventura para salir del paro](#), 22 de mayo 2017

7 El Espectador: [Así se llegó al acuerdo para levantar el paro en Buenaventura](#), 6 de junio de 2018

8 Semana: [Asesinan a uno de los líderes del paro cívico en Buenaventura](#), 27 de enero 2018

9 Nomadesc, Comisión de veeduría derechos humanos paro cívico para vivir con dignidad y en paz en el territorio: Boletín [02](#); [03](#); [04](#); [05](#); [Acción urgente](#); mayo-junio 2017

Desplazamiento y resistencia en Bajo Atrato

Acompañamiento a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz en diferentes territorios colectivos del Bajo Atrato donde permanece la figura de Zonas humanitarias y Zonas de Biodiversidad como mecanismos de protección de la población civil y el medioambiente



PBI acompaña a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz en el Bajo Atrato¹ desde finales de los 90. Siendo una zona geoestratégica, con muchos intereses, las comunidades han sufrido el conflicto armado de manera intensa y cotidiana. Hoy en día, en un contexto de reconfiguración del conflicto armado, están reclamando sus tierras. A finales del año 2017, la tragedia golpeó nuevamente a las comunidades con los asesinatos de dos de sus líderes: Mario Castaño y Hernán Bedoya. PBI acompañó a las familias en esos momentos difíciles y alertó su red de apoyo internacional publicando de manera excepcional un comunicado público expresando sus preocupaciones frente a la situación de alto riesgo y de violencia que se vive en las comunidades del Bajo Atrato.

Mario Castaño fue un líder reclamante de tierras del Consejo Comunitario de La Larga Tumaradó, en el Bajo Atrato. Durante más de 15 años había denunciado a empresarios por el despojo de tierra y por ser beneficiarios de operaciones paramilitares desarrolladas en connivencia con la fuerza pública a mediados de los 90². En los últimos tiempos había denunciado la presencia de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en La Larga Tumaradó. El 26 de noviembre, cuando se encontraba en su finca, Mario fue asesinado por hombres armados en presencia de su familia, incluyendo varios niños. Una semana antes había participado en una reunión nacional que tenía como propósito la instalación de la consulta previa para la reparación colectiva de la comunidad del territorio colectivo e hizo parte activa de la demanda de restitución de tierras que fue presentada cinco días después de su muerte³. Son cerca de 5.000 personas pertenecientes a 49 comunidades asentadas en las cuencas de los ríos La Larga y Tumaradó las que esperan la devolución de sus predios a través de esta demanda de restitución colectiva⁴.

Mario contaba con un esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección, consistente de dos escoltas y una camioneta, pero este esquema era compartido con un líder de otra comunidad, por lo que solo recibía esta protección la mitad del tiempo⁵. Mario Castaño fue uno de los principales referentes de los procesos de reclamación de las tierras disputadas en Curbaradó y La Larga Tumaradó. Asimismo, impulsó la instalación de la Zona de Biodiversidad “el Árbol del Pan” en Tumaradó. Fue acompañado por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP) que, a su vez, en el Bajo Atrato recibe el acompañamiento internacional de PBI.

El 8 de diciembre, dos semanas después del asesinato de Mario Castaño, fue asesinado Hernán Bedoya, líder reclamante de tierras del Consejo Comunitario de Pedeguita y Mancilla. El asesinato, también presuntamente perpetrado por las AGC, ocurrió el mismo día en que un gran número de líderes de las comunidades del Bajo Atrato se encontraban participando en la conmemoración de la operación Septiembre Negro, la cual fue perpetrada por paramilitares y militares en la región de Urabá hace veinte años, en la que fueron asesinadas 143 personas⁶. Hernán, propietario de la Zona de Biodiversidad Mi Tierra, ubicada en el territorio colectivo de Pedeguita y Mancilla, se había opuesto a la implementación de los proyectos agroindustriales de la empresa Agromar S.A⁷. Cabe destacar que varios directivos de la empresa Agromar han sido señalados y/o enfrentan procesos por narcotráfico o vínculos con paramilitares⁸. La Zona de Biodiversidad “Mi Tierra” durante ese año había sido objeto de múltiples intervenciones en el marco del proyecto agroindustrial de plátano para exportación y palma aceitera, proyectos a los que Hernán Bedoya había presentado en diferentes escenarios locales y nacionales su oposición por las afectaciones ambientales y sociales que de ello se derivan.

Desde el 2015, Hernán Bedoya había recibido amenazas por parte de las AGC, las cuales se agudizaron el año pasado. Sin embargo, y pese a las reiteradas denuncias, sólo le fueron otorgadas como medidas de protección por la Unidad Nacional de Protección un chaleco antibalas y un teléfono celular, que no fue de mucha utilidad en una zona rural sin cobertura de telefonía celular⁹.

Mario Castaño y Hernán Bedoya fueron líderes comunitarios que, por su trabajo de defensa del territorio, se enfrentaron a poderosos enemigos. Mario era vocero de la comunidad que pidió la anulación de un título minero de la empresa multinacional Anglo Gold Ashanti. Por su parte, Hernán se opuso a la implementación de megaproyectos agroindustriales¹⁰. En el marco de nuestro trabajo de acompañamiento físico a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, los voluntarios de Brigadas Internacionales de Paz visitaron en diversas oportunidades las Zonas de Biodiversidad de Mario Castaño y Hernán Bedoya. Y, dolorosamente, en el marco de este trabajo también nos tocó acompañar sus sepelios¹¹. Estas trágicas muertes reforzaron



nuestro compromiso y nuestro trabajo de acompañamiento físico en las comunidades del Bajo Atrato¹². En la actualidad, somos la única organización internacional no gubernamental con una presencia constante en la región. En el ámbito de la incidencia, tras los asesinatos de Mario Castaño y Hernán Bedoya, PBI Colombia realizó una activación de su red de apoyo. Entre otras acciones, se sacó una Alerta de Acción¹³ el 30 de noviembre, tras el asesinato de Mario y, por primera vez en varios años, un comunicado público¹⁴ el 12 de diciembre tras el asesinato de Hernán. También se realizaron reuniones de incidencia con los Ministerios de Defensa e Interior, y participamos en dos reuniones con el cuerpo diplomático organizadas por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz en diciembre. En la segunda de ellas participaron 25 líderes de las comunidades del Bajo Atrato que están amenazados por neoparamilitares, así como representantes de las embajadas de Francia, España, Portugal, Reino Unido, Finlandia, Holanda, Canadá, la delegación de la UE y OACNUDH. En dicha reunión, los líderes del Bajo Atrato resaltaron la responsabilidad de los empresarios bananeros, palmeros y ganaderos, así como su connivencia con los grupos neoparamilitares responsables de los asesinatos. En estas reuniones surgieron un conjunto de peticiones que luego fueron presentadas por los líderes del Bajo Atrato ante las instituciones del gobierno.

Los líderes del Bajo Atrato participaron en Bogotá en reuniones con los Ministerios de Defensa e Interior¹⁵ y la Procuraría General de la Nación¹⁶. Cabe resaltar que el Procurador General hizo suyas muchas de las peticiones de los líderes amenazados. En estas reuniones el gobierno llegó a algunos acuerdos con las comunidades, acuerdos que se están cumpliendo e incluyen el incremento de los esquemas de protección otorgados por la Unidad Nacional de Protección a los líderes amenazados y el incremento de la presencia de la fuerza pública en el Bajo Atrato. Gracias a los esfuerzos de incidencia desarrollados por los líderes de las comunidades, con el apoyo de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y otras organizaciones, el Fiscal General de la Nación y la directora de la Unidad para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales visitaron Apartadó y Belén de Bajirá el 21 de diciembre, donde se reunieron con los líderes amenazados y anunciaron que un grupo itinerante de la Unidad de Desmantelamiento de Organizaciones Criminales de la Fiscalía General se quedará en la zona para identificar e investigar a los integrantes de los grupos armados ilegales responsables de los asesinatos de reclamantes de tierra en el Bajo Atrato¹⁷.





Foto: Ozman Bedoya, hijo mayor de Hernan Bedoya, sosteniendo el retrato de su padre en un acto de homenaje en el sitio donde fue asesinado en Playa Roja, Curvaradó

Foto de izquierda: Liliana Isabel Flores, la viuda de Mario Castaño, sostiene el retrato de su esposo junto a tres de sus hijas, en la finca donde fue asesinado Mario Castaño

Notas de Pie

- 1 Sobre todo las cuencas de Curvaradó, Jiguamiandó y Cacarica; los últimos años se extendió a unas Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad de las cuencas de Pedeguita y Mancilla y La Larga y Tumaradó.
- 2 Cijp: [Asesinan al líder Mario Castaño Bravo, integrante de Conpaz en Chocó](#), 26 de noviembre 2017
- 3 Ibidem
- 4 El Espectador: [Por fin se radicó la demanda de restitución de la Larga Tumaradó](#), 6 de diciembre 2017
- 5 IPC: [Denuncia pública por asesinato del líder reclamante Mario Castaño Bravo](#), 29 de noviembre 2017
- 6 PBI Colombia: [¿Por qué matan a los líderes antes de Navidad?](#), 19 de diciembre 2017
- 7 Cijp: [Asesinado líder Hernán Bedoya](#), 8 de diciembre 2017
- 8 Contagio Radio: [Empresa Agromar provoca desastre ambiental en Chocó](#), 20 de junio 2017
- 9 Cijp: [Asesinado líder Hernán Bedoya](#), 8 de diciembre 2017
- 10 PBI Colombia: [¿Por qué matan a los líderes antes de Navidad?](#), 19 de diciembre 2017
- 11 PBI Colombia: [Hoy sepultaron al líder de tierras, Mario Castaño](#), 29 de noviembre 2017
- 12 PBI Colombia: [Con unos disparos le quitaron la vida a Mario Castaño](#), 5 de diciembre 2017
- 13 Difundida a nuestra Red de apoyo – no pública
- 14 PBI Colombia: [PBI llama la atención sobre el incremento de riesgo para personas Defensoras de Derechos Humanos](#), 13 de

Talleres psicosocial y autoprotección en la Finca Europa, Sucre



PBI Colombia también realiza su acompañamiento a comunidades y organizaciones de manera integral, esto es, adicional a la incidencia política y la presencia física en terreno, el poder abordar con los colectivos aspectos referentes al análisis y la gestión de su seguridad, reflexionando además de manera grupal sobre el impacto emocional que conlleva realizar esta labor, para así desarrollar estrategias de auto-protección y protección colectiva que además contemplen una mirada psicosocial de auto-cuidado y cuidado mutuo.

Este es el caso de la Finca La Europa, proceso acompañado por PBI Colombia con nuestros cuatro ejes de trabajo, y de manera diferencial, donde se incluyen grupos de jóvenes, grupos de mujeres así como la junta directiva de esta comunidad.

El resultado de este tipo de acompañamiento ha derivado en que la misma comunidad sirva de

puente para extender el acompañamiento de PBI a otras comunidades, entendiendo que esto no solamente amplía el trabajo de PBI, sino que teje relaciones entre estas comunidades pues, consideran que abordar con procesos vecinos estos aspectos, fortalece el trabajo entre las comunidades y la protección de las mismas.



Misión Internacional de Verificación desituación de Derechos Humanos

Entre octubre y noviembre de 2017, la Fundación Mundubat, PBI Colombia y PBI EE organizaron una Misión de Verificación sobre la Implementación de los Acuerdos de Paz un año después de la firma. La misión, conformada por expertos y expertas internacionales, quiso visibilizar la situación actual de dicha implementación, sobre todo en los territorios, poniendo atención específicamente en los puntos 2,3 y 5 del Acuerdo desde un enfoque de género. PBI Colombia organizó conjuntamente con las organizaciones mencionadas y fue parte integrante de la Misión, en el marco de su papel de observador internacional. Se realizaron visitas y reuniones con comunidades y sus acompañantes nacionales de la Cijp en el Bajo Atrato como con comunidades y organizaciones en la ciudad de Tumaco (Nariño), Buenaventura (Valle del Cauca) y Quibdó (Chocó). También se realizaron reuniones con organizaciones y plataformas en Bogotá, con autoridades civiles y militares colombianas, tanto a nivel local como nacional, así como con Ministerios, Defensoría, Consejería y Fuerza Pública en Bogotá. Del mismo modo se llevaron a cabo reuniones con varios representantes del Cuerpo Diplomático en una mesa redonda facilitada por la Delegación de la UE, con organismos internacionales (incluyendo Oacnudh, Acnur y la Misión de Verificación de la ONU), integrantes de los mecanismos surgidos tras el Acuerdo de Paz (como la Comisión Nacional de Garantías, la Unidad de Búsqueda de personas Desaparecidas) e integrantes del Congreso colombiano.

Destacamos además, las visitas a dos ETRC donde nos reunimos con ex integrantes de las FARC_EP. Producto de esta misión fue la publicación del informe “En los territorios la Paz no se siente, la esperanza se mantiene”, el cual fue lanzado en el Parlamento Europeo el día 6 de diciembre del pasado año, y posteriormente en varios lugares de Europa.





Desde PBI Colombia (con el apoyo de PBI Bélgica) se realizó además un evento con la sociedad civil en Bruselas y otro en Barcelona (con el apoyo de PBI Catalunya, la Taula Catalana, el ICIP y PCN). Para ello, PBI y Mundubat invitaron a Franklin Castañeda, miembro del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos e integrante por la sociedad civil de la Comisión Nacional de Garantías, y Marcia Mejía, líderesa indígena Eperara Siapidar y vocera de CONPAZ. Gracias al apoyo de los Grupos Nacionales esta gira continuó en Noruega y en el Estado Español.

Como conclusiones de la Misión destacaron la falta de avances en materia de implementación de los puntos observados, en particular en lo referente en garantías de seguridad para quienes defienden los derechos humanos y lideran políticas relacionadas a la implementación del acuerdo mismo, el empeoramiento de la situación de seguridad de varias de las comunidades encontradas, el aumento de presencia de grupos armados ilegales en las regiones y falta de presencia de autoridades civiles en las áreas más rurales (por ejemplo Bajo Atrato) donde las comunidades han declarado ser objeto de varias agresiones por parte de diferentes actores así como se encuentra recogido en el Informe mismo de la Misión. El enfoque de género también se ha visto muy perjudicado en su implementación; de las más de 100 medidas previstas en el Acuerdo, muy pocas se habían implementado eficazmente a la hora en que se dio la Misión de Verificación.

Resultados de esta acción de visibilización y sensibilización han sido diferentes preguntas parlamentarias, resoluciones, varios actos de sensibilización y difusión de información. Además, se contribuyó a que en enero de 2018 se diese en la plenaria del Parlamento Europeo un debate sobre el Apoyo al proceso de Paz en Colombia con una declaración de la Alta Representante de la UE.

La presentación y difusión del informe ha seguido en 2018.



“Gracias a dios para mí es muy grato contar con el acompañamiento de una gran organización defensora de los derechos humanos como es la Comisión Inter-eclesial de Justicia y Paz (CIJP) y a través de ella PBI, organización internacional. Siendose un gran respaldo lo que ha significado para mi poder regresar a mi municipio Mapiripán, Meta. Visitar la finca, hacer trabajos con las diferentes comunidades indígenas y campesinas, visibilizar lo que pasa en el municipio con las diferentes violaciones que hace la empresa Poligrow. Sin la ayuda de ustedes, como defensor de los derechos humanos, reclamante de tierras y vocero Conpaz no fuera sido posible haber realizado todo eso. Y sobre todo con el riesgo que implica el conflicto en el municipio. Y sobre todo agradecerle el poder yo regresar con mi esposa y mi hijo. Que dios les bendiga.”

William Aljure- víctima de la violencia paramilitar y reclamante de tierra, Mapiripan - Meta Agosto 2017





Informe de Recursos Humanos y financiero

Voluntarias y voluntarios de terreno



El objetivo del Área de Formación y Recursos Humanos es nutrir al Proyecto PBI Colombia con un equipo global de voluntarios y voluntarias de acompañamiento formados dentro de los procedimientos y principios del Proyecto, capaces de desarrollar el cumplimiento de las responsabilidades para poder proteger los espacios de trabajo de las personas defensoras de derechos humanos.

En ese sentido, el trabajo de formación y gestión de recursos humanos se basa en implementar y liderar todas las fases del proceso de formación de las personas candidatas con el objetivo de lograr su mejor preparación posible y seleccionarlas según los criterios establecidos en el Proyecto.

Esto incluye monitoreo y asesoría de los procesos formativos de los voluntarios, también durante su permanencia en el proyecto, seguimiento a los voluntarios y voluntarias para asegurar su bienestar así como velar para que sigan los procedimientos establecidos en el proyecto en cuanto a las políticas de recursos humanos.

Durante el año 2017 hemos reorganizado estructuralmente los Equipos de Terreno (reduciendo de 3 a 2 los Equipos de Terreno a nivel funcional, pero manteniendo las tres sedes operativas de Barrancabermeja, Apartadó y Bogotá).

La reducción del tamaño de nuestra organización en cuanto a voluntarios y voluntarias de terreno (desde los 24 con los que comenzamos el 2017 hasta los 18 con los que estamos operando a inicios de 2018) supuso la suspensión de una entrada para nuevas personas prevista para Febrero-Marzo. Sin embargo, para relevar a voluntarios que estuvieron concluyendo su periodo durante este tiempo, sí realizamos dos entradas con sus correspondientes procesos de Formación Inicial en el segundo semestre del año: 3 voluntarios nuevos entraron en Septiembre (2 mujeres y 1 hombre, de nacionalidades escocesa, italiana y francesa), y 7 en Diciembre (2 hombres y 5 mujeres, de nacionalidades española, francesa, suiza, francesa y argentina).

En 2017 se realizó un Encuentro de Formación-Selección, durante el mes de octubre, culminando un proceso de selección que empezó a principio del año y que se divide en varias etapas: (recepción solicitudes, entrevistas, cuadernos de autoformación). Durante cada Encuentro, que tiene una semana de duración, trabajamos a través de métodos participativos e interactivos, los siguientes temas: historia y análisis de la coyuntura colombiana actual; mandato, principios y ejes de trabajo de PBI Colombia, manejo de miedo y estrés, resolución constructiva de conflictos, dinámicas grupales y consenso; género y diversidad así como cuestiones prácticas antes de llegar a Colombia. En este Encuentro participaron 18 personas candidatas provenientes de España, Francia, Suiza, Guatemala, Alemania y Holanda, de las cuales fueron seleccionadas 14 personas (12 mujeres y 2 hombres).

Total de Brigadistas en 2017

Brigadistas de acompañamiento actualmente en el COP, por países de origen	32
España	9
Francia	7
Italia	3
Alemania	2
Reino Unido	2
Suiza	2
Bélgica	1
Austria	1
Perú	1
Brasil	1
Canadá	1
Nueva Zelanda	1
Argentina	1

Al llegar al proyecto, los nuevos voluntarios realizan dos semanas de orientación intensiva en Bogotá para ubicarse, conocer las áreas de trabajo, sus responsabilidades y familiarizarse con los protocolos de seguridad y con el Proyecto. Al llegar a sus futuros equipos de trabajo, pasan por una fase de formación inicial con el objetivo de integrarse a dicho equipo y a su nuevo entorno, conocer a las zonas de trabajo, las organizaciones y personas acompañadas así como profundizar y ampliar sus capacidades de análisis, en cuanto a interlocuciones con autoridades y actuaciones en el terreno.

Durante su tiempo en el Proyecto, todas las personas integrantes de PBI Colombia reciben también talleres de formación continua con diferentes enfoques (por ejemplo: coyuntura actual, análisis, seguridad y crisis, debates políticos, estado del equipo, acompañamiento emocional, charlas de los defensores, etc) con el fin de fortalecer y potenciar las capacidades internas del Proyecto. Estos espacios formativos son realizados tanto por personas de cada equipo de terreno como por miembros de otras áreas del Proyecto, y por expertos externos.

Durante el año 2017, se ha enfrentado el desafío que ha representado la reducción del tamaño del COP en cuanto a estructura y RRHH, logrando preservar nuestro alto grado de impacto en cuanto a la protección de las personas defensoras de DDHH en Colombia.

La reorganización de nuestra estructura y procesos internos en lo que se refiere a mecanismos de toma decisiones y manejo del Consenso como uno de nuestros principios fundamentales que hemos comenzado a realizar en 2017 está dando como resultado una mayor optimización de nuestros recursos, camino por el que queremos continuar en 2018.

El otro reto fundamental que continuaremos enfrentando es el de la estabilidad de las personas que integran el proyecto, fundamentalmente en cuanto a Brigadistas del Equipo de Apoyo, en la búsqueda de mecanismos que minimicen la rotación de personas en esos puestos. Igualmente en este aspecto, esperamos continuar consolidando el logro del aumento de la estabilidad/continuidad y permanencia en el proyecto, conseguido en los últimos años en lo que respecta a Brigadistas de Terreno.

Informe financiero



Peace Brigades International (PBI), es una organización no gubernamental reconocida por la ONU, que mantiene un equipo permanente de personas observadoras-acompañantes internacionales en Colombia desde 1994.

Dado que su sede principal se encuentra en el extranjero, que sus ingresos provienen en un 100% de fuente internacional y al no existir en materia contable una normatividad específica para este tipo de organizaciones, se ha asimilado el registro de sus operaciones económicas a la de organizaciones sin ánimo de lucro en general.

Los estándares contables de PBI Colombia cumplen con los lineamientos de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia; sus operaciones se ajustan a las normas contenidas en la ley 1314 y sus decretos reglamentarios 2420 y 2496 de 2015 – NIIF para PYMES. Las cuentas del Proyecto han sido auditadas por la firma Abako's S.A.

Diferencia en Cambio

Los estados financieros del Proyecto Colombia de PBI son valorados en Pesos (moneda en la que se registran las operaciones económicas, financieras y patrimoniales en Colombia), al finalizar cada período contable, y son presentados en Dólares (moneda en la que se registran los ingresos y gastos realizados en Estados Unidos) y en Euros (para los ingresos y gastos realizados en la Eurozona).

Los ingresos y gastos son contabilizados en la moneda en la que son realizados. En la monetización de los ingresos de la cuenta «Donaciones por cobrar» y, al registrar las cuentas por cobrar o avances y las justificaciones de éstos en monedas diferentes al Peso y en meses diferentes, se genera la utilización de la cuenta «Diferencia en cambio». Estos registros se realizan en las cuentas de resultado.

Las cifras y resultados que se presentan a continuación corresponden al período 2017 y reflejan la situación financiera del Proyecto Colombia de Peace Brigades International (PBI).

En ese sentido, los recursos transferidos por agencias internacionales para el desarrollo del objeto dentro de Colombia son contabilizados como ingresos, y los gastos derivados de las actividades correspondientes al mandato institucional como gastos. En la actualidad, no se tienen inversiones ni cuentas que generen intereses que se puedan tomar como ingresos de fuente nacional, causales de impuesto de renta. Por su parte, la organización reconoce como gastos los que se generan en relación de causación y asociación de ingresos, los cuales se encuentran regulados siempre por el presupuesto general.

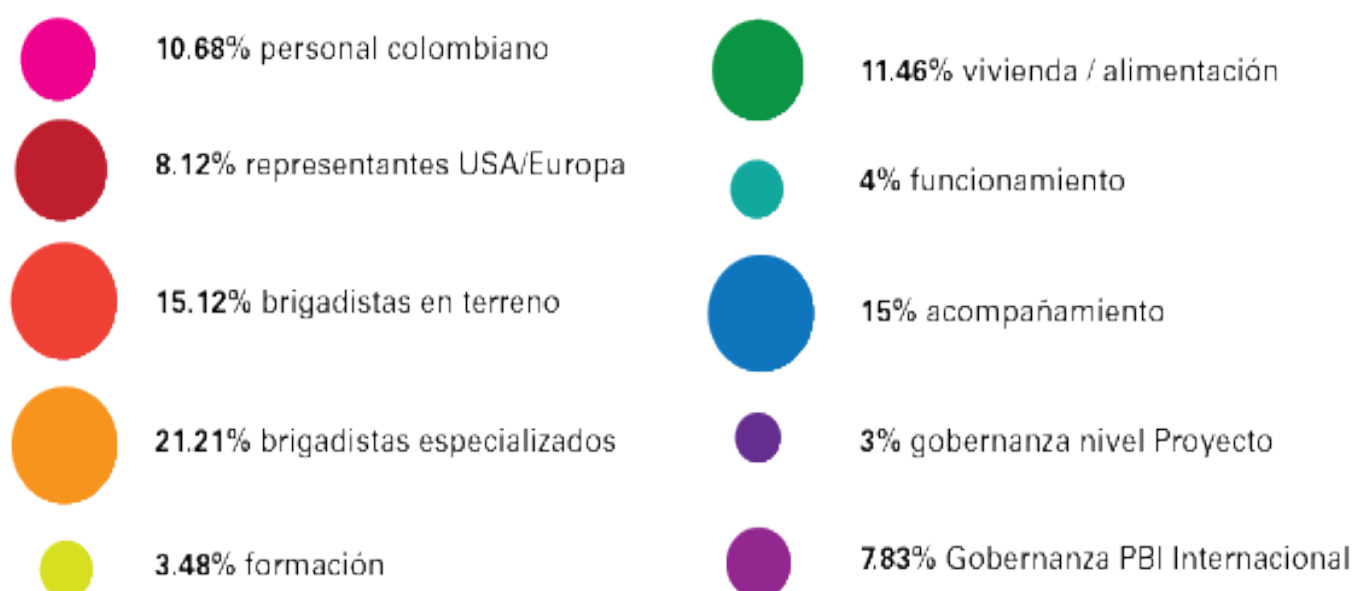
Estados Financieros al Cierre de las Cuentas Anuales

Al cierre del año 2017, 31 de diciembre, las cuentas arrojan un déficit del ejercicio por valor de € 4.660. Los ingresos totales (operacionales) alcanzaron la cifra de € 704.842 y los gastos ascendieron a € 745.844. Debido a los rendimientos bancarios y un diferencial cambiario que resultó a favor, se obtuvieron adicionalmente ingresos no operacionales por valor de € 29.875, lo que representa un total de ingresos de € 734.717.

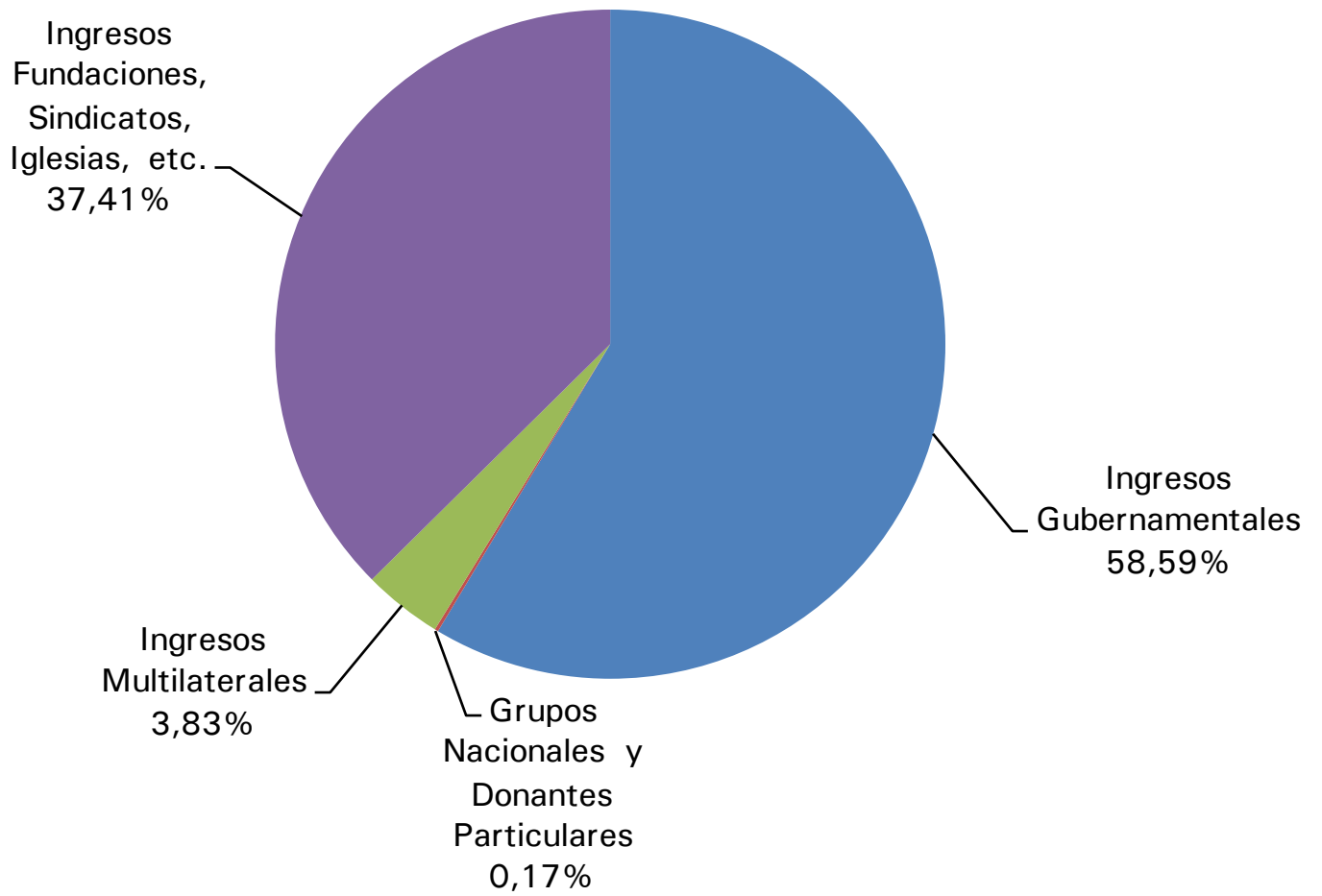
En graficos:

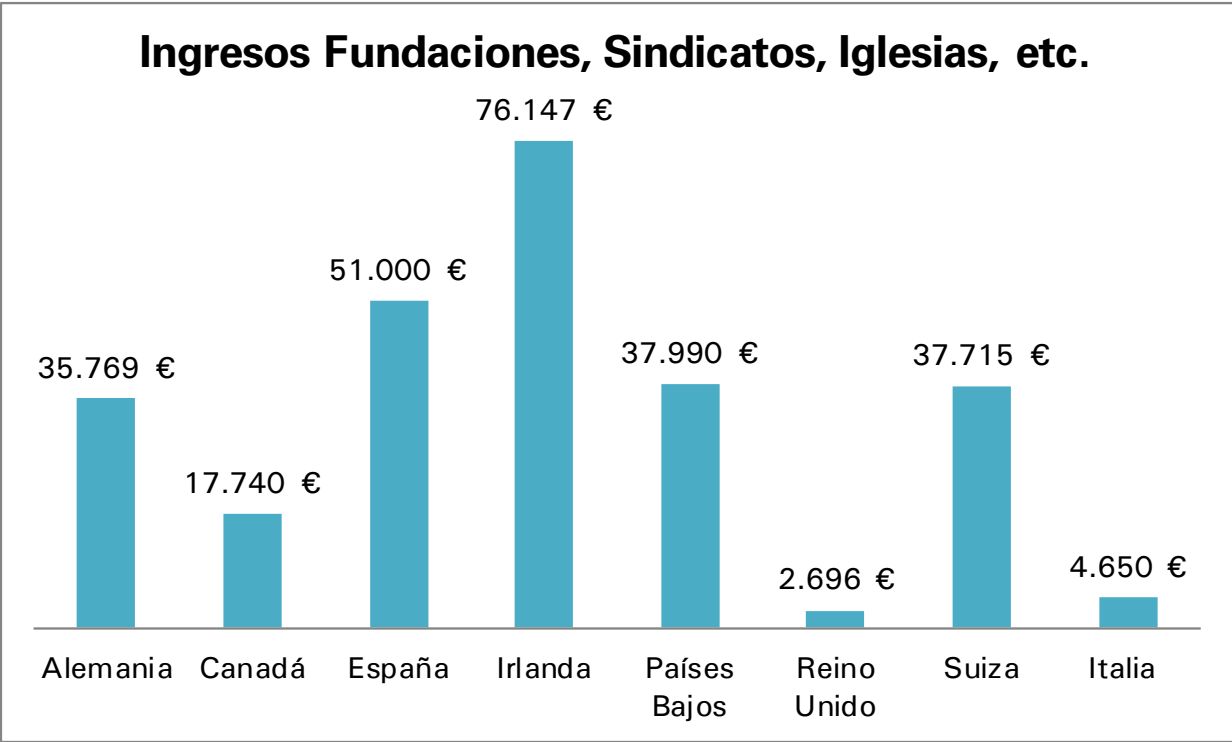
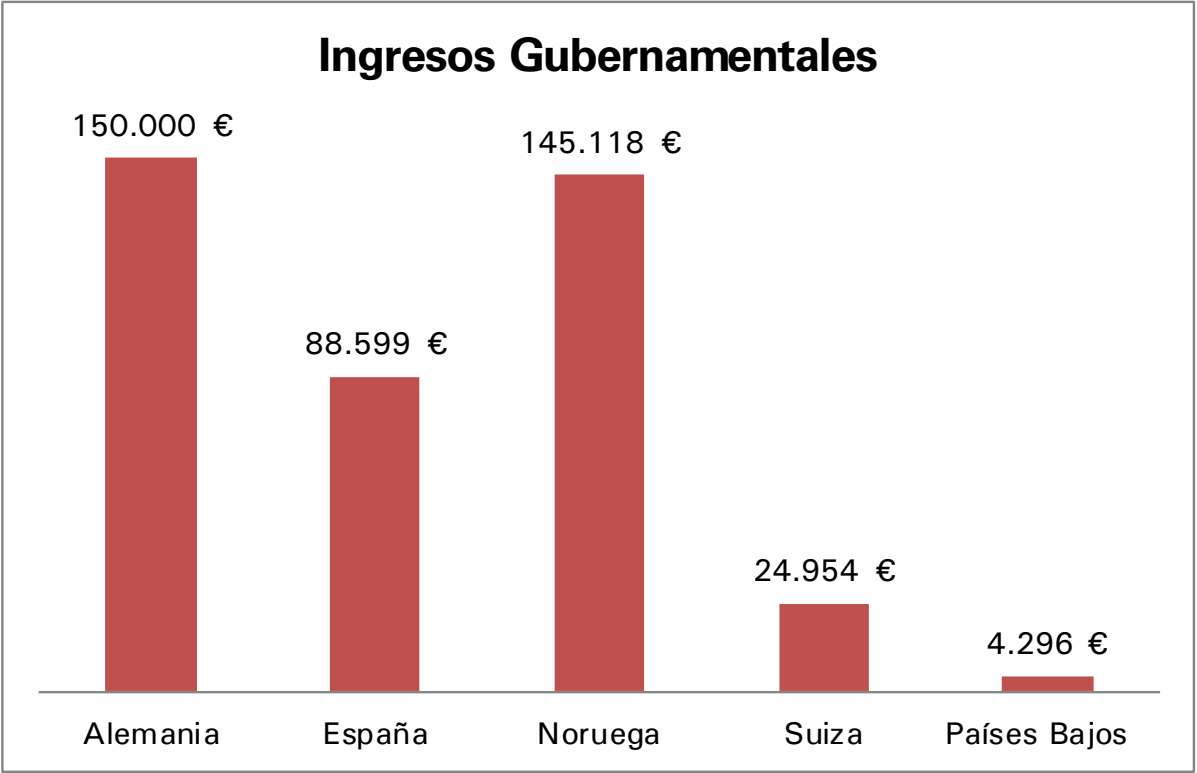


En qué gastamos



Origen de los fondos





PBI Colombia es un proyecto posible gracias a :

Agencia Catalana de Cooperación y Desarrollo (ACCD) | Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el desarrollo | Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo | Ayuntamiento de Barcelona | Ayuntamiento de Donostia | Ayuntamiento de Pamplona | Barreau de Paris | Brot für die Welt – Pan para el Mundo | Christian Aid / Charity | Christian Aid / Irish Aid | Ferster Foundation | Gobierno de Navarra | ICCO – Interchurch Organization for Development Cooperation | Iglesia Valdense y L'Otto | Mensen met een Missie | Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega 15/11292, COL - 15/0007 | Ministerio de Asuntos Exteriores de Holanda | Misereor | Open Society Foundations | Oxfam Intermón | Protect Defenders / The European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) | Protestant Church St. Gallen – Tablat | Servicio Civil para la Paz – Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo | UNIFOR Canadá | Ville de Geneve DGVS | Donaciones individuales | Donaciones anónimas | PBI Alemania | PBI Canadá | PBI Cataluña | PBI Estado Español | PBI Francia (Non Violence XXI) | PBI Nafarroa | PBI Noruega | PBI Suiza | PBI UK

Informe Anual 2017
Fotografías
Redacción y edición
Diagramación y diseño
ISSN
© PBI Colombia
Contacto

PBI Colombia, junio 2018
PBI Colombia
PBI Colombia
PBI Colombia
1908 - 3489
Todos los derechos reservados
publicaciones@pbicolombia.net

Las opiniones y planteamientos expresados no reflejan necesariamente las opiniones de Peace Brigades International, ni de sus financiadores.



Creemos en la vida antes de la muerte





Peace Brigades International, (PBI), es una organización no gubernamental reconocida por la ONU, que mantiene un equipo permanente de personas observadoras-acompañantes internacionales en Colombia desde 1994. La misión de PBI es proteger el espacio de actuación de las personas defensoras de derechos humanos que sufren represión por su trabajo no violento en pro de los derechos humanos.

El equipo de PBI Colombia, siempre a petición local, permanece en el terreno acompañando a personas y organizaciones amenazadas. Este trabajo de terreno se complementa con una labor importante de interlocución e incidencia con las autoridades civiles y militares, así como con organismos estatales, ONG, iglesia, cuerpo diplomático y organizaciones para promover los derechos humanos y difundir información sobre la situación de los derechos humanos en el país.

Si considera que la presencia de PBI es útil para proteger a las personas que trabajan por los derechos humanos, usted puede:

- apoyarnos económicamente a título personal o a través de una entidad,
- unirse a su grupo nacional PBI más cercano y así apoyar a la red internacional desde su ciudad,
- aplicar para ser brigadista en uno de los proyectos de PBI.

www.pbicolombia.org

Proyecto PBI Colombia
Washington, DC (USA)
reputa@pbicolombia.net

Delegación de PBI en Colombia
Bogotá, Colombia
Tel. (+57) 1287 0403
coin@pbicolombia.net

Proyecto PBI Colombia,
Unión Europea
Tel. (+34) 634 256 337
coordinacion.europa@pbicolombia.net